

Noviembre 20 de 1946

70ª REUNION — 8ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor JUAN HORTENSIO QUIJANO, vicepresidente de la Nación y del contraalmirante (R.) ALBERTO TEISAIRE, presidente para el caso de acefalía

Secretarios: señores ALBERTO H. REALES y SANTIAGO A. JOB

MINISTRO PRESENTE:

de Relaciones Exteriores y Culto,
Doctor JUAN ATILIO BRAMUGLIA

SENADORES PRESENTES:

ANTHIE, Armando G.
ARRIETA, Alfredo J. L.
AVENDAÑO, Arcadio B.
BASALDUA, Juan Carlos
BAVIO, Ernesto F.
BUSQUET, Alfredo
CRUZ, Luis
FIGUEIRAS, Demetrio
GÓMEZ DEL JUNCO, Felipe
GÓMEZ HENRIQUEZ, Samuel
HERRERA, Julio
LAZARO, Juan Fernando de
LUCO, Francisco R.
MARTÍNEZ, Ramón Linidor
MATHUS HOYOS, Alejandro
RAMELLA, Pablo A.
SOSA LOYOLA, Gilberto
TANCO, Miguel A.
TASCHERET, Oscar
TEISAIRE, Alberto
VALLEJO, César
ZERDA, Justiniano de la

AUSENTES, EN MISIÓN ESPECIAL:

AMELOTTI, Osvaldo
DURAND, Alberto
LORENZÓN, Ricardo Octavio
MOLINARI, Diego Luis
SAADI, Vicente Leonides
SOLER, Lorenzo (h.)

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo, remitiendo copia del Convenio Interamericano de Lu-

cha contra la Langosta, solicitado por el Honorable Senado.

II.—Mensaje del Poder Ejecutivo, acompañando copia del decreto que incluye entre los asuntos a tratarse en sesiones extraordinarias el proyecto de leyes de comunicaciones del personal de Comunicaciones.

III.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados.

IV.—Comunicaciones del Honorable Poder Ejecutivo.

V.—Despachos de comisiones.

2.—Consideración del despacho de las Comisiones de Agricultura y de Previsión Social, sobre el proyecto de ley sobre salario y condiciones de trabajo para las cosechas de cereales, y semillas. Se aprueba, con modificaciones.

3.—Consideración del despacho de la Comisión Especial para estudiar el plan de inversiones del Poder Ejecutivo en la organización del servicio de correos. Se aprueba, con modificaciones.

4.—Integración de comisión.

5.—Apéndice:

I.—Sanciones del Honorable Senado.

II.—Comunicaciones al Poder Ejecutivo.

—En Buenos Aires, a los 17 y 20, dice el

obreros y en la campaña se paga en forma irrisoria a la gente. En esta forma, ocurre que el hijo del colono o campesino que venía a hacer la conscripción o llegaba de paso a las ciudades, al conseguir un trabajo bien remunerado, se quedaba en ellas y abandonaba a sus padres, sus hermanos y sus otros familiares.

Al hacer equitativo el jornal en el campo lo mismo que en las ciudades, vamos a evitar esa despoblación y el desmembramiento de la familia campesina.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración en particular.

—Se lee el artículo 1º.

Sr. Gómez del Junco. — Pido la palabra.

Si la comisión no tuviera inconveniente, pediría que se incluya la palabra «corte» después de la palabra «recolección» y antes de «trilla»; porque la recolección de la cosecha se hace en tres etapas, una de las cuales es el corte, que es un trabajo especial en la recolección de la cosecha, antes de proceder a emparvar.

Pediría que se agregue esa palabra, a fin de que no quede una laguna en la redacción de este artículo.

Sr. Bavio. — ¿No cree el señor senador que al decir recolección, se entiende también el corte?

Sr. Gómez del Junco. — El corte es un trabajo especial de la cosecha, señor senador.

Sr. Antille. — Entonces diría: recolección, corte y trilla.

Sr. Gómez del Junco. — Efectivamente, señor senador.

Sr. Antille. — La comisión no tiene inconveniente en aceptar.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 1º con el agregado propuesto por el señor senador por Córdoba.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 2º.

Sr. Figueiras. — Voy a solicitar a la comisión que suprima el párrafo que dice: «con los patronos y obreros o sus representantes», poniendo: «con los patronos y los representantes del personal».

Quiérase o no, eso deja libertad para hacer arreglos individuales, que no van a dar buen resultado. Por lo común, los trabajadores del campo están organizados y tienen representantes, y nosotros, por principio, tenemos que reconocer esa representación. En algunos casos ya

la reconocen los patronos, y por lo menos, que sea el gobierno y el Poder Legislativo el que la reconozca.

Sr. Antille. — El artículo prevé el caso de que no haya asociaciones, o sea que los obreros no tengan representantes, en cuyo caso el arreglo tendrá que hacerse entre los patronos y los obreros que trabajen en conjunto; cuando haya representantes, entonces sí se aplicará el artículo y comprenderá los representantes de los obreros. Ese es el sentido que debe darse a la ley. No hay oposición ni tampoco hay exclusión para tratar con los representantes de los obreros.

Sr. Figueiras. — Pero así quedará el camino abierto para posibles discordias, y para que sea el patrono el que elija con quién va a tratar.

Sr. Antille. — El precio mínimo lo fija el Poder Ejecutivo, previa consulta con los patronos y obreros, o con los representantes de éstos cuando los haya.

Sr. Figueiras. — Entonces, ¿ése es el alcance que le da la comisión?

Sr. Antille. — Del bloque, señor senador.

Sr. Gómez del Junco. — Quiero aclarar un poco más. Se ha dejado esa parte del artículo —que al señor senador le parece inconclusa—, tal como está, con el propósito de que en las zonas en que los obreros no están organizados, puedan tratar con los patronos. Pero hay zonas donde personas que no pertenecen a los gremios están figurando como dirigentes, a pesar de que nunca han trabajado en el campo. Por eso, le hago presente al señor senador que se ha dejado esa válvula, para evitar que ocurra aquello.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 2º.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se leen y aprueban los artículos 3º, 4º y 5º.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el despacho.

Sr. Cruz. — Hago indicación en el sentido de que se comunique en el día de hoy esta sanción a la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. — Así se hará, señor senador.

3

ORGANIZACION DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION

—Se lee:

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión Especial encargada de estudiar el Plan de Realizaciones e Inversiones y los proyectos de leyes que le acompañan, ha considerado el referente al Servicio Exterior de la Nación; y, por las razones que dará el miembro

informante, os aconseja le prestéis vuestra aprobación.

Sala de la comisión, 20 de noviembre de 1946.

Oscar Tascheret. — Armando G. Antille. — Luis Cruz. — Pablo A. Ramella. — César Vallejo. — Demetrio Figueiras. — Samuel Gómez Henríquez. — Alfredo Busquet. — Arcadio B. Avendaño. — Alberto Teisaire. — Alfredo J. L. Arrieta.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

I. — Funcionarios del Servicio Exterior

Artículo 1º — La presente ley se aplicará al personal del Servicio Exterior de la Nación integrado por los funcionarios del cuerpo diplomático y consular que dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Art. 2º — El personal del Servicio Exterior de la Nación está integrado por funcionarios que se clasifican en las siguientes categorías:

- a) Embajadores extraordinarios y plenipotenciarios;
- b) Enviados extraordinarios y ministros plenipotenciarios de primera clase;
- c) Enviados extraordinarios y ministros plenipotenciarios de segunda clase;
- d) Consejeros de primera clase y cónsules generales de primera clase;
- e) Consejeros de segunda clase y cónsules generales de segunda clase;
- f) Secretarios de primera clase y cónsules de primera clase;
- g) Secretarios de segunda clase y cónsules de segunda clase;
- h) Secretarios de tercera clase y cónsules de tercera clase;
- i) Agregados y vicecónsules.

Art. 3º — El personal del Servicio Exterior desempeñará, indistintamente, funciones en las misiones diplomáticas, en las oficinas consulares o en la cancillería, conforme al sistema de rotación que se determine.

Cuando los funcionarios presten servicios en la cancillería, se les confiarán, en cuanto sea posible, los cargos que les correspondan por sus categorías.

El título que usarán en cada caso será el del cargo que desempeñen.

De la categoría d) a la categoría i), inclusive, los funcionarios se equiparan a todos sus efectos.

Art. 4º — El Poder Ejecutivo podrá designar embajadores a ministros de primera clase elegidos del cuadro permanente del cuerpo diplomático y a personas extrañas al mismo. En este último caso el nombramiento se considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del jefe de Estado que lo otorgó.

Art. 5º — El nombramiento y remoción de los embajadores y ministros plenipotenciarios se hará conforme a las disposiciones de la Constitución nacional y de la presente ley.

Prestado el acuerdo para la designación, no se requerirá uno nuevo para los ulteriores traslados que disponga el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo podrá, durante el receso del Congreso y cuando lo reclamen las conveniencias del país, designar embajador y ministro plenipotenciario ad referendum de la Honorable Cámara de Senadores.

Pedido el acuerdo, los funcionarios propuestos conservarán el cargo, interinamente, hasta tanto se acepte o rechace el mismo. El funcionario propuesto por el Poder Ejecutivo al Honorable Senado y que fuere rechazado, conservará el cargo que ocupaba en la cancillería.

Art. 6º — Los ministros plenipotenciarios podrán prestar servicios en las embajadas como ministros consejeros cuando así lo requieran las conveniencias de la representación.

Art. 7º — En caso de ausencia del jefe de misión, el ministro consejero o el consejero que le siga en jerarquía y antigüedad en la misión, desempeñará, sin necesidad de nombramiento especial, las funciones de encargado de negocios *ad interim*. Los secretarios y agregados diplomáticos sólo podrán desempeñar tal función mediante designación expresa.

En los países en que no hubiere acreditada una representación diplomática permanente se podrá designar encargado de negocios a funcionarios del cuerpo diplomático, de la categoría de consejeros como mínimo.

Art. 8º — El Poder Ejecutivo podrá designar embajadores, ministros plenipotenciarios o agentes en misión especial ante los gobiernos extranjeros, y delegados u observadores ante conferencias, congresos, asambleas y organismos internacionales.

Las personas así designadas y las que integren esas delegaciones, cuando no pertenezcan al Servicio Exterior, quedarán asimiladas, a los efectos del rango protocolar y mientras dure su misión, a los funcionarios del cuadro permanente de la categoría que, en cada caso, determine el Poder Ejecutivo.

Art. 9º — A propuesta de los respectivos mi-

nisterios u organismos competentes, el Departamento de Relaciones Exteriores, designará agregados militares, navales, aeronáuticos, económicos, obreros, culturales, docentes o de otro carácter técnico, que formarán parte de la representación diplomática de la sede en que actúen y todos dependerán del jefe de la misión.

Art. 10. — Para pertenecer al cuerpo diplomático y consular, es indispensable:

- a) Ser argentino nativo o por opción;
- b) Tener pleno goce de los derechos civiles y políticos;
- c) Observar una conducta moral, pública y privada;
- d) Presentar certificados de buena salud y poseer condiciones físicas adecuadas;
- e) Que el cónyuge del funcionario sea argentino nativo o por opción;
- f) Prestar juramento de fidelidad a la Nación y a sus instituciones;
- g) Cumplir con los demás requisitos que se determinen.

El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones de ingreso, el escalafón y el régimen de promociones.

II. — Obligaciones

Art. 11. — El funcionario tendrá un máximo de 45 días continuos para emprender viaje, a contar del día siguiente de la notificación. Este plazo podrá ser menor cuando el ministro lo juzgue conveniente.

La falta de cumplimiento a esta disposición, sin autorización escrita del ministro, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, será considerada falta grave y el Poder Ejecutivo podrá decretar la sanción que estime correspondiente.

Art. 12. — Ningún funcionario podrá contraer matrimonio sin previa autorización del ministro de Relaciones Exteriores.

III. — Estado diplomático

Art. 13. — El grado de cada funcionario del Servicio Exterior, con las obligaciones y derechos que le son inherentes, constituye el estado diplomático del que no podrá ser desposeído su titular sino por las causales establecidas por la Constitución y la ley.

Art. 14. — Son obligaciones de los funcionarios del cuadro permanente del servicio exterior:

- a) Prestar servicios en forma regular con toda su capacidad y diligencia, para el mejor desempeño de sus funciones;
- b) Defender el prestigio y los intereses de la Nación y reclamar las ventajas que

le acuerdan los tratados, las leyes y los usos internacionales;

- c) Aceptar los cargos, destinos o misiones inherentes a las funciones, los que no pueden renunciarse ni excusarse, salvo por las causales que la ley o el reglamento determinen;
- d) Difundir ampliamente el conocimiento de la República y fomentar sus buenas relaciones políticas, comerciales y culturales con el país en que ejercen sus funciones;
- e) Informar periódica y documentadamente sobre los diversos aspectos del Estado ante el que están acreditados;
- f) Cumplir los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones emanadas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto;
- g) Efectuar las correspondientes rendiciones de cuentas de los fondos que reciban;
- h) Observar una conducta ajustada a la más estricta moralidad en su actuación social y económica.

Art. 15. — Está expresamente prohibido a los funcionarios del servicio exterior:

- a) Intervenir en la política interna del país en que ejerzan sus funciones;
- b) Hacerse cargo de la representación de otro país sin autorización del ministro;
- c) Formar parte de comisiones destinadas a asumir una actitud colectiva ante el gobierno local, a no ser que este procedimiento fuera previamente autorizado por el ministerio;
- d) Representar o gestionar en la República o en el extranjero, firmas o intereses privados;
- e) Ejercer el comercio y cualquier actividad similar en el país en el cual desempeñen su misión;
- f) Ejercer cualquier profesión liberal;
- g) Desempeñar cargo alguno remunerado.

Art. 16. — Son derechos del estado diplomático:

- a) No ser removido sino en virtud de las causales que se enumeran en la presente ley;
- b) Cumplir el destino que le corresponda de acuerdo con el respectivo reglamento;
- c) Percibir los sueldos y su coeficiente, gastos extraordinarios, de instalación, representación y de oficina;
- d) Obtener los pasajes para el funcionario, su familia y personas de servicio.

en la cantidad y forma que se determinen;

- e) No permanecer más tiempo que el que se fije en el reglamento, en aquellos países considerados insalubres o que se encuentren en estado de guerra o de lucha civil;
- f) Que se computen doble para los efectos de su jubilación los servicios prestados en las condiciones del inciso anterior;
- g) Usar las licencias ordinarias y extraordinarias;
- h) El haber de retiro y la pensión para los deudos según lo determine la correspondiente ley;
- i) Para los funcionarios en retiro o jubilados, el uso de los atributos de su categoría, de acuerdo con la reglamentación correspondiente.

Art. 17. — El estado diplomático se pierde:

- a) Por renuncia expresa del interesado, quien no podrá abandonar su puesto hasta que aquélla sea aceptada por el Poder Ejecutivo y ponga en posesión del cargo a su reemplazante o a quien corresponda, de acuerdo con lo que el reglamento establezca;
- b) Por condena criminal impuesta por los tribunales comunes o federales;
- c) Por pérdida de la ciudadanía.

IV. — Junta calificadora

Art. 18. — En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto funcionará una junta calificadora presidida por el señor subsecretario, con superintendencia directa con respecto a la dirección de personal, e integrada por un embajador, un ministro de primera clase y el cónsul general más antiguo, conforme a las normas reglamentarias que a tal efecto se dicten. El director del personal actuará como secretario asesor.

Art. 19. — Son funciones de la junta calificadora:

- a) Llevar un registro de aspirantes al Servicio Exterior y calificar por orden de méritos a los inscritos en él;
- b) Calificar anualmente al personal y funcionarios del ministerio, quedando exceptuados los embajadores y ministros de primera clase;
- c) Asesorar para los casos de ascenso, traslado, retiro, disponibilidad y aplicación de medidas disciplinarias. En los casos de separación, será indispensable oír previamente al funcionario afectado.

Art. 20. — Toda persona que ingrese a la cancillería deberá jurar o prometer bajo su

honor, antes de asumir sus tareas, que guardará absoluta reserva y discreción acerca de todas las cuestiones vinculadas con el país y que en razón de su cargo conozca o intervenga. Toda violación será objeto de exoneración.

El compromiso de honor se mantendrá aún después de haber abandonado el servicio.

El personal prestará el juramento o promesa ante las autoridades superiores de acuerdo con la reglamentación.

V. — Traslados

Art. 21. — Todos los funcionarios del Servicio Exterior están sujetos a ser trasladados. Se entiende por traslado el pase de un país a otro y, dentro del mismo país, de una ciudad a otra cuando se trate de servir en oficinas consulares.

Art. 22. — Para el traslado se tendrán en cuenta las aptitudes especiales de los funcionarios, sus condiciones de adaptabilidad, el rendimiento acreditado en determinadas funciones y medios, sus conocimientos de idiomas, su situación de familia y todas aquellas condiciones personales que hagan recomendable la nueva designación para la mayor eficiencia de sus servicios.

Art. 23. — El traslado se dispondrá por decreto del Poder Ejecutivo, y el funcionario trasladado deberá permanecer, como mínimo, un año en el destino fijado.

Art. 24. — El período de servicio en el exterior no podrá comportar una permanencia de más de cuatro años consecutivos en el mismo país. Cuando fuere preciso una permanencia mayor, se establecerá la prórroga de común acuerdo con el funcionario interesado; en caso contrario corresponderá acordar el traslado.

Art. 25. — El funcionario cuyo traslado o disponibilidad quedare sin efecto, tendrá derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios que la notificación de tal medida le hubiere ocasionado, y cuya compensación no será inferior a la mitad de los gastos del traslado efectivo.

Art. 26. — Cuando un funcionario en viaje de traslado deba pasar por la República para llegar a su nuevo destino, no podrá permanecer en el país más de treinta días continuos. Si por cualquier motivo se excediera de ese plazo, no recibirá sueldo por el tiempo del exceso, salvo que no haya medio de transporte a su destino dentro del tiempo indicado, u otros casos, debidamente justificados.

Art. 27. — Cuando se inicie un traslado, y durante su curso el funcionario sea destinado a otro lugar que resulte intermedio entre los dos destinos anteriores, no gozará de otra asignación que la recibida por el traslado comenzado. En caso de que el nuevo destino sea por una vía diferente a la iniciada, se le abonará una compensación que no será inferior a la mitad de los gastos de traslado efectivo.

VI. — Retiro, disponibilidad y remoción

Art. 28. — Sin perjuicio de los beneficios de la jubilación que acuerdan las leyes de carácter general a todos los funcionarios de la administración y las de carácter especial que rigen para los embajadores y ministros plenipotenciarios, los funcionarios del Servicio Exterior con más de quince años de servicios en la carrera y cincuenta años de edad, que no tuvieran la antigüedad requerida para la jubilación, podrán retirarse obteniendo un beneficio igual al dos y medio por ciento del sueldo promedio de los últimos cuatro años, por cada año de servicio computable para el retiro. No se computará el coeficiente, los gastos de representación, instalación o de oficina, ni ningún otro que no sea sueldo. Igual beneficio corresponderá, sin tener en cuenta la antigüedad ni la edad, al funcionario que por el hecho o en ocasión de sus funciones, fuere objeto de una invalidez parcial y permanente o total que le dificulte en su labor específica, a cuyo efecto le será abonado un beneficio que no podrá ser inferior a la tercera parte del sueldo que percibe, sin coeficiente.

El funcionario sin derecho a jubilación, con más de veinte años de servicios y cincuenta y cinco años de edad, que con anterioridad a la presente ley o en el futuro cesare en su cargo, por razones que no le fueran imputables, podrá acogerse a los beneficios del retiro, sobre la base del dos y medio por ciento del sueldo promedio de los últimos cuatro años por cada año de servicio computable.

Los derechohabientes del funcionario que falleciere sin años de servicios suficientes para transmitir algún beneficio, tendrán derecho a una pensión vitalicia que no podrá ser inferior al cincuenta por ciento de la tercera parte del sueldo que percibía.

Los derechohabientes de los funcionarios jubilados o con retiro tendrán derecho a una pensión vitalicia que no será inferior a la suma de doscientos cincuenta pesos por mes, siempre que por otra disposición legal no les correspondiere una suma mayor.

Art. 29. — Serán declarados en disponibilidad:

- a) Los funcionarios que lo soliciten, por razones particulares, siempre que tengan más de cinco años de antigüedad en la carrera;
- b) Los que desempeñen funciones electivas nacionales, provinciales o comunales, mientras dure su mandato;
- c) Los funcionarios, sin acuerdo del Senado, cuando a juicio del Poder Ejecutivo deban pasar a disponibilidad por exigirlos así los intereses del país.

Art. 30. — El funcionario designado con acuerdo del Senado conservará su empleo mientras

dure su buena conducta, y la remoción del mismo deberá efectuarse de igual manera.

Art. 31. — Cuando la remoción o disponibilidad no afectare la dignidad del funcionario, éste tendrá derecho a una indemnización que en ningún caso será inferior a tres meses de sueldo, con coeficiente, a partir de la fecha de la designación y por cada año de servicio, no pudiendo exceder de doce meses de sueldo, con coeficiente, cualquiera sea la antigüedad.

A los efectos de la aplicación del coeficiente para el pago de la indemnización, se considerará el país más favorable al funcionario, con anterioridad a los últimos seis meses en que se pide su remoción o disponibilidad.

Art. 32. — Todo funcionario removido o en disponibilidad tendrá derecho a los pasajes y gastos de regreso, quedando comprendidos los familiares y el empleado que hubiera salido del país para prestar tareas personales al funcionario respectivo o a su familia.

Asimismo el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto deberá abonar al funcionario notificado del traslado o disponibilidad, los daños y perjuicios ocasionados por la rescisión del contrato de locación de casa, hasta un máximo de dos años. El mismo beneficio será acordado al funcionario removido, siempre que la causa invocada no afecte su dignidad.

Art. 33. — La disponibilidad corre desde que el interesado se notifica del respectivo decreto que así lo determina, y no excederá de un año, en el caso del artículo 29, inciso a), por el término de duración del mandato público cuando el funcionario resulte electo, y transcurrido el plazo de dos años, en el caso del artículo 29, inciso c).

Art. 34. — El funcionario quedará eliminado de la carrera si, vencidos los plazos anteriores, no se reincorporara al cargo y la persona que lo reemplaza interinamente quedará confirmada en el mismo, debiendo requerirse el acuerdo cuando fuere preciso.

El funcionario reincorporado, durante el término de la disponibilidad, conforme al artículo 29, inciso c), reintegrará la suma percibida en concepto de indemnización, exceptuando un mes de sueldo, sin coeficiente, por cada mes transcurrido desde que fuera notificado de la disponibilidad.

Art. 35. — Cuando los funcionarios se acojan a los beneficios de la jubilación o del retiro, el ministerio les abonará, además, un mes de viático y los gastos de embalaje y transporte de sus muebles, enseres y libros, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.

A los efectos de la jubilación, no se computará la suma abonada en concepto de indemnización.

No tendrá derecho al mes de viático el funcionario que, al ser designado, gozare de una jubilación o retiro.

VII. — Sueldos, asignaciones y pasajes

Art. 36. — Los sueldos del personal del cuadro permanente del Servicio Exterior serán fijados por el presupuesto, no pudiendo ser el de la última categoría inferior al del oficial 9º.

Art. 37. — Los funcionarios comprendidos en las categorías a), b), c), d), del artículo 2º, recibirán, por una sola vez, el importe correspondiente a un mes de sueldo para gastos extraordinarios, sin coeficiente.

Todos los funcionarios del Servicio Exterior obtendrán, para gastos de instalación, el importe igual a dos meses de sueldo, si fueran solteros o viudos sin hijos, y a tres meses, los casados, los viudos con hijos menores y solteros que tengan a su cargo ascendientes de primer grado.

Art. 38. — Cuando por designación o traslado, el funcionario deba emprender viaje, recibirá los pasajes reglamentarios para él y su familia.

Si fuere designado para una misión temporal, tendrá derecho hasta dos pasajes.

Art. 39. — Se entiende por familia, a los fines de esta ley, la esposa, los hijos varones menores de edad y los mayores incapacitados para el trabajo, las hijas solteras y los ascendientes de primer grado del funcionario, cuando éste compruebe, por información judicial, que subviene a sus necesidades.

Los funcionarios de las cuatro primeras categorías recibirán, además, un pasaje para un empleado personal.

Art. 40. — En todos los casos le serán reembolsados al funcionario los gastos de embalaje y transporte de sus muebles, libros y demás enseres, desde un destino a otro.

El Poder Ejecutivo reglamentará el máximo de carga que podrá transportar cada funcionario, de acuerdo con su categoría.

Art. 41. — En los casos de traslado, los funcionarios tendrán derecho a percibir los gastos de conformidad al siguiente régimen:

- a) Si el nuevo destino fuera dentro del país, de una ciudad a otra, recibirán un mes de sueldo;
- b) En todos los demás casos, les corresponderá dos meses de sueldo.

Art. 42. — En caso de ascenso, los funcionarios recibirán una suma equivalente al mes de sueldo del nuevo cargo para los gastos inmediatos que exige su mayor representación.

Art. 43. — Los sueldos de los funcionarios del Servicio Exterior y las asignaciones que les correspondan, serán abonados por trimestre anticipado.

Cuando se encuentren en el extranjero, los pagos se efectuarán en la divisa que el funcio-

nario indique. A ese fin, el Ministerio de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con el Banco Central de la República, abrirá una cuenta especial en dicha institución, en la cual depositará las sumas que la Tesorería de la Nación entregue para el pago de los rubros referidos.

El ministerio comunicará a principio de cada año al Banco Central la lista nominal detallada de los pagos que tiene que efectuar en el exterior y, ulteriormente, las modificaciones que se vayan produciendo en la misma.

El Banco Central girará automáticamente, al tipo oficial comprador, los importes respectivos, con la anticipación necesaria para que los funcionarios los reciban en su destino el primer día hábil de cada trimestre.

Los gastos de giro e impuestos a las transferencias sobre el exterior, correrán por cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Art. 44. — El funcionario que por decreto fuere separado o puesto en disponibilidad y que hubiere recibido por adelantado el pago del trimestre, deberá reintegrar, dentro de los treinta días, la diferencia correspondiente desde la fecha de la notificación hasta el vencimiento del trimestre, bajo pena de incurrir en delito de defraudación. En el caso del artículo 31, podrá existir compensación.

Art. 45. — El funcionario que en virtud de usos o de exigencias transitorias se trasladara a otro lugar podrá modificar su residencia, previa autorización del ministerio.

En ese caso, recibirá una remuneración extraordinaria equivalente a la tercera parte de su sueldo.

Art. 46. — Si un funcionario del Servicio Exterior estuviera acreditado ante más de un gobierno, recibirá como sobresueldo la tercera parte de su sueldo por el término que ejerza sus funciones ante el gobierno del país en que no tuviera su residencia habitual y los pasajes de ida y vuelta.

Art. 47. — Los jefes de las misiones diplomáticas recibirán los gastos de representación que para cada una de ellas determine anualmente el ministerio.

Art. 48. — Para cada embajada y legación, tengan o no por residencia una propiedad del Estado, se asignará, con cargo de rendir cuenta, la suma necesaria para gastos, entre otros, de luz, calefacción o refrigeración y cuidadores para el adecuado mantenimiento de los edificios.

Art. 49. — En los países en que el Estado no posea casa, se destinará, con cargo de rendir cuenta, la suma necesaria para el alquiler de una residencia para el jefe de misión.

Se determinará, también, anualmente, las partidas destinadas a las representaciones diplomáticas consulares para alquileres de oficinas, gastos de escritorio y demás conceptos.

Art. 50. — Los encargados de negocios *ad interim* recibirán, desde el momento en que invistan ese carácter, un sobresueldo equivalente a la tercera parte de su sueldo. Los gastos de representación les corresponderán desde la fecha en que se hicieren cargo de la misión, salvo que la ausencia del titular se debiese al uso de la licencia ordinaria anual, único caso en que tales gastos se liquidarán a partir del día siguiente al vencimiento de ese plazo, si por cualquier circunstancia el titular no hubiese reasumido sus funciones.

Las demás asignaciones se consideran como inherentes a la misión misma, correspondiendo al que se encuentre al frente de ella, en la fecha respectiva, rendir cuenta de su inversión.

Art. 51. — Cuando el Poder Ejecutivo designe encargados de negocios en los países donde no hubiere acreditada una representación diplomática permanente, el ministerio fijará las sumas que correspondan para gastos de representación y de oficina.

Art. 52. — Para la locación de las residencias y oficinas de las representaciones diplomáticas y consulares, el ministerio fijará normas generales a fin de asegurar el mayor acierto en la elección, la mejor instalación de los servicios y las condiciones de los respectivos contratos.

Art. 53. — Las personas que el Poder Ejecutivo designe para el desempeño de misiones especiales ante gobiernos extranjeros, o en congresos, conferencias y reuniones internacionales, así como los miembros que integran las delegaciones, recibirán los pasajes de ida y vuelta y los viáticos y gastos de representación que, en cada caso, determinará por decreto el Poder Ejecutivo.

La reglamentación establecerá los viáticos que correspondan a los funcionarios del servicio exterior, según su categoría, cuando se les encomiende estas u otras comisiones oficiales.

Art. 54. — Los sueldos, asignaciones y gastos previstos en la presente ley que correspondan al personal del servicio exterior y a las representaciones diplomáticas y consulares, serán liquidados por anticipado con el coeficiente que corresponda al país de destino y que fijará periódicamente por decreto el Poder Ejecutivo, siempre que la ley no disponga otra forma de pago.

El mismo coeficiente se aplicará al sueldo, instalación y traslado desde el momento que el funcionario emprenda viaje, teniendo como base el país de destino.

Cuando pase a prestar servicio en la cancillería, se aplicará el coeficiente del país de su anterior destino para los gastos de traslado, como también sobre el sueldo, hasta su llegada a la República.

VIII. — Licencias

Art. 55. — El personal del servicio exterior tendrá derecho a las siguientes licencias:

- a) Ordinaria anual de treinta días;
- b) Ordinaria de cuatro meses para ser usada en el país, cuando hayan permanecido en el extranjero más de cuatro años continuos;
- c) En caso de lesión o enfermedad, hasta cuarenta y cinco días hábiles por año. Este plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la lesión o enfermedad así lo exija, para lo cual se tendrá como base mínima la que determinan las leyes y reglamentos vigentes;
- d) Extraordinaria, por un período que no podrá exceder de tres meses cada dos años y que interrumpe el plazo para obtener la licencia del inciso b).

Art. 56. — Las licencias a que se refieren los incisos a), b) y c), del artículo anterior, serán otorgadas con sueldo íntegro y coeficiente. Las extraordinarias serán sin coeficiente.

Las licencias del inciso b) son obligatorias y los funcionarios tendrán derecho a los pasajes para la venida y regreso, con respecto a las personas comprendidas en el artículo 39. En ningún caso se computará la duración del viaje como formando parte de la licencia.

Art. 57. — El Poder Ejecutivo concederá las licencias del inciso d) del artículo 55 y el ministro de Relaciones Exteriores las restantes.

Art. 58. — La licencia ordinaria de cuatro meses excluye, durante el año en que sea acordada, el derecho a la licencia anual de treinta días.

IX. — Medidas disciplinarias y remoción

Art. 59. — Los funcionarios del Servicio Exterior, exceptuados aquellos que tienen acuerdo del Senado, podrán ser objeto de las medidas disciplinarias siguientes:

- a) Apercibimiento verbal;
- b) Apercibimiento por escrito;
- c) Suspensión;
- d) Cesantía;
- e) Exoneración.

Art. 60. — Las medidas disciplinarias se aplicarán en los casos de:

- a) Negligencia reiterada;
- b) Indisciplina;
- c) Abandono del cargo;
- d) Inconducta grave, pública o privada;
- e) Indignidad;

- f) Violación dolosa de los deberes;
- g) Infracción al artículo 223 del Código Penal.

Para su aplicación se tendrá en cuenta el carácter y la importancia del hecho cometido, el daño originado y los antecedentes del inculpado.

Art. 61. — Las medidas disciplinarias enumeradas podrán ser aplicadas por las siguientes autoridades:

- a) Apercibimiento verbal y por escrito, por el jefe inmediato;
- b) Suspensión por menos de diez días, por el subsecretario o por el jefe de la misión diplomática o de la representación consular, respectivamente;
- c) Suspensión de diez a treinta días, por el ministro;
- d) Suspensión por más de treinta días, cesantía o exoneración, por el Poder Ejecutivo.

La suspensión comportará siempre la privación de sueldo, mientras dure el término de su aplicación.

Art. 62. — Los jefes que aplicasen medidas disciplinarias de apercibimiento o suspensión deberán dar cuenta inmediatamente al superior, para la anotación en la foja de concepto del funcionario.

Art. 63. — En los casos de graves denuncias concretas contra un funcionario del Servicio Exterior que puedan dar motivo a suspensión por más de treinta días, cesantía o exoneración, se pasarán los antecedentes a la junta calificadora, la que, antes de expedirse, dará vista al inculpado, acordándole un plazo a fin de que pueda presentar las pruebas de descargo.

X. — Disposiciones generales

Art. 64. — Los funcionarios del Servicio Exterior que regresan a la República por haber terminado su misión o para desempeñar transitoria o permanentemente tareas que el Ministerio de Relaciones Exteriores les encomiende, tendrán derecho a introducir con franquicia aduanera todos los efectos de uso personal, de su casa y familia, así como su automóvil, dentro de un plazo no mayor de doscientos días desde la fecha de su llegada al país. Este plazo podrá ser ampliado por causa debidamente justificada.

Art. 65. — En los casos en que se resuelva jubilar de oficio a un funcionario del Servicio Exterior que se halle en el extranjero, se fijará un plazo de tres meses para que prepare su regreso al país, y se concederán, asimismo, a las personas comprendidas en el artículo 39,

los pasajes y gastos que le correspondan reglamentariamente.

Art. 66. — El personal del Servicio Exterior y los familiares que hubiesen terminado en el extranjero los estudios en una universidad autorizada para extender diplomas habilitantes, podrán ejercer su carrera en la República, como si su diploma emanara de una universidad nacional, a cuyo efecto cualquier universidad del país deberá otorgar el diploma argentino correspondiente. Si no hubieran terminado su carrera, las universidades y demás instituciones de enseñanza primaria, secundaria, especial o universitaria del Estado reconocerán la validez del título respectivo, y si no hubieren alcanzado a obtenerlo, se reconocerán las materias aprobadas en el extranjero, equiparables a las que se rinden en la República.

Art. 67. — Los hijos del personal del Servicio Exterior nacidos fuera del territorio argentino a consecuencia de la labor encomendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a su progenitor o progenitores, se considerarán argentinos nativos.

Art. 68. — Los empleados administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que reúnan las condiciones establecidas para ingresar en el cuerpo diplomático y consular, y que soliciten su incorporación, tendrán derecho a ser considerados preferentemente.

Art. 69. — Créase la carrera del personal administrativo destacado en el exterior, a cuyo efecto el ministerio estructurará el reglamento correspondiente, sobre la base fundamental del conocimiento del idioma del país que se tendrá por destino.

Art. 70. — El personal administrativo, técnico profesional y de servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que presta servicios en el país, se rige por las leyes y disposiciones generales que conciernen a la administración pública.

Art. 71. — El personal del clero que dependa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se regirá por disposiciones y prácticas en vigor o que eventualmente se establezcan. Los empleados administrativos y de servicio a las órdenes del clero están comprendidos en las disposiciones del artículo anterior, en cuanto los concierne.

Art. 72. — En los casos de fallecimiento de una persona perteneciente al Servicio Exterior, el Poder Ejecutivo procederá a repatriar los restos del extinto, abonará los gastos del sepelio y dispondrá que se entregue a la viuda, hijas solteras o hijos menores o impedidos, para gastos de luto, la cantidad correspondiente a dos meses de su sueldo.

El mismo derecho corresponderá a los derechohabientes del empleado que prestaba tareas personales al funcionario o miembros de la familia.

Abonará, asimismo, los pasajes de regreso a la República, de la familia, y los gastos de embalaje y transporte de sus muebles y demás efectos personales. El repatrio, los pasajes y los gastos se entienden hasta la Capital de la República, salvo que el lugar de destino demande una erogación menor.

Cuando falleciere un miembro de la familia, el Poder Ejecutivo repatriará los restos y correrá con todos los gastos hasta el domicilio que los familiares determinen en la Capital de la República.

El Poder Ejecutivo abonará el pasaje de venida y regreso de la persona que acompañe los restos. En ausencia de familiares, se reconocerán los mismos derechos a la persona que justificare haber estado vinculada al mismo.

XI. — Disposiciones transitorias

Art. 73. — Cuando el funcionario o las personas comprendidas en el artículo 39 contrajeran una enfermedad endémica, por el hecho o en ocasión de la misión encomendada al funcionario, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto abonará los gastos de la asistencia médica, farmacéutica, hospitalaria, traslado, etcétera, sin perjuicio de la indemnización correspondiente al funcionario, conforme lo reconoce la presente ley.

Art. 74. — El Poder Ejecutivo determinará el régimen de contribuciones que sea necesario, a fin de asegurar los beneficios del retiro para el personal del Servicio Exterior que establece esta ley, en base a los estudios conjuntos que a tal efecto realizarán el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el organismo competente de previsión social.

Art. 75. — Quedan exceptuadas del artículo 10, inciso e), las personas que en la actualidad prestan servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, siempre que acrediten que el esposo o esposa extranjeros, llegaron al país antes de haber cumplido los diez años de edad. En tal caso, deberán obtener la carta de ciudadanía argentina en el plazo de un año, a contar de la publicación de la presente ley.

Art. 76. — Ningún funcionario podrá percibir otra remuneración que la que determina el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, siendo incompatible con cualquier jubilación, retiro o remuneración a cargo de la administración pública, nacional, provincial o comunal.

Art. 77. — Los funcionarios actualmente en disponibilidad quedan eliminados de la carrera, no adquieren el estado diplomático ni están comprendidos en las disposiciones de esta ley, exceptuados los beneficios jubilatorios y de retiro que la misma acuerda.

Art. 78. — El Poder Ejecutivo, por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, regla-

mentará la presente ley, que comenzará a regir sesenta días después de su publicación.

Art. 79. — Quedan derogadas las leyes 4.711, 4.712 y sus decretos reglamentarios.

Art. 80. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y oportunamente archívese.

Sr. Presidente. — En consideración.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

El proyecto de ley de Organización del Servicio Exterior de la Nación, que está a consideración del Senado, tiende a salvar algunas deficiencias de la ley anterior, como también a dar fuerza legal a los decretos que periódicamente se han ido dictando por el Poder Ejecutivo, para llenar ciertos vacíos de dicha ley.

La que regía anteriormente para el servicio diplomático del exterior, dictada en el año 1905, bajo el número 4.711, reglamentó dicho servicio, y la ley 4.712 lo hizo con el servicio consular. Por decreto dado en acuerdo general de ministros, que lleva el número 30.991, del año 1944, se reglamentaron conjuntamente ambos servicios: el diplomático y el consular.

El proyecto de ley que tratamos ahora tiende a dar la misma unidad a la reglamentación de estos servicios, porque se ha demostrado que la irregularidad del funcionamiento de ambos cuerpos de empleados, en forma dispar, traía dificultades que no podían subsanarse sin un régimen legal como el que se proyecta ahora.

Se ha tratado de corregir lo anticuado de esas disposiciones durante varios años con proyectos presentados, especialmente en la Cámara de Diputados. En el año 1914, el diputado Saavedra Lamas hacía notar que la antigüedad de la ley vigente entonces exigía una reforma y que debía crearse un servicio diplomático, así como se había creado un servicio consular, y reglamentarse en la forma que las exigencias de los tiempos modernos requerían. El diputado Antelo, en 1933, abundó también en razonamientos para exigir dicha reforma. Los diputados Lazo y Solari también presentaron proyectos en 1933 y 1935, y finalmente el ex diputado Noel, presidente de la Cámara de Diputados en el año 1940, presentó un proyecto completo sobre reformas de la reglamentación del servicio consular.

Estamos considerando ahora el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que tiende a salvar dificultades en la reglamentación de esta clase de servicios de los empleados que en el exterior cumplen las funciones de representantes de la Nación. Se trata de una reglamentación completa de los dos servicios, diplomático y consular, en la que se contempla, en su conjunto, el servicio exterior de la Nación.

Se garantizan especialmente dichas funciones, dándose a los funcionarios un estado diplomático y un grado, según la designación que

ellos hayan obtenido. Se hace también un escalafón y se establece un sistema de inamovilidad, por lo menos mientras dure la buena conducta de las personas que hayan tenido acuerdo del Senado, las que no pueden ser removidas sino también con acuerdo de este cuerpo.

Para los demás empleados que el Poder Ejecutivo puede nombrar sin acuerdo, como son los agentes consulares, se establece una cierta forma de inamovilidad, reconociendo sólo al Poder Ejecutivo el derecho de ponerlos en disponibilidad cuando los intereses de la Nación así lo exijan, o cuando lo soliciten los propios funcionarios consulares. En el cuerpo de la ley se establecen las formas en que han de poder desempeñar sus funciones o aspirar a desempeñarlas, creándose una junta calificadora, que ha de considerar a los aspirantes, a los que deberá registrar especialmente, y que ha de realizar también la calificación anual del personal, el asesoramiento para los casos de ascensos, traslados, retiros y disponibilidades, y en los casos de sanciones o medidas disciplinarias.

En sí, la ley trata de crear una carrera regular de servicios en el exterior. Tiende a darles una garantía de estabilidad, con escalafón, ascenso y una retribución de acuerdo con el grado de los servicios que prestan. Se establece también una garantía de retiro cuando cumplan cierta edad, y no puedan obtener la jubilación completa. Otorga también el derecho de remoción al Ejecutivo, cuando la inconducta de los empleados haga necesaria la medida. Se da también un régimen de licencias para los empleados del servicio exterior. Se establecen calificaciones para medidas disciplinarias, que van desde el apercibimiento verbal a la exoneración, según los casos que motiven esas medidas; y, por fin, entre las medidas generales, se consideran casos especiales que deben ser reglamentados y contemplados por la ley, y no con decretos reglamentarios, como hasta ahora se había hecho. La ley, señor presidente, es una mejora de la anterior, como he dicho, mejora que lleva en sí algunos artículos especiales de lo ya dispuesto en decretos anteriores, que habían contemplado algunas lagunas de la reglamentación legal.

El artículo de más importancia, a mi modo de ver, es el que crea el personal del servicio y lo clasifica de acuerdo con las categorías que resultan y emergen de los cargos que se asignan, y que van desde embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, hasta agregados y vicecónsules, consignados en el artículo segundo, en los incisos a) hasta i).

Es un proyecto que, sin duda, no necesita una larga discusión, porque es claro, categórico; y creo que el Senado ha de prestarle la aprobación indispensable para que se convierta en ley en el día de hoy.

En particular, me reservo el derecho de pedir algunas ligeras modificaciones, más bien de redacción, en ciertos artículos que son deficientes, o aparecen oscuros. Con estas palabras, señor presidente, doy por fundado el proyecto y pido la aprobación del Honorable Senado.

Sr. Figueiras. — Pido la palabra.

Esta ley va a regular la forma en que deben conducirse nuestras representaciones diplomáticas en el exterior. Eso está perfectamente bien, lo mismo que lo que dijo el señor senador Antille. Pero todo esto no va a tener aplicación práctica, si nuestros representantes en el exterior no viven las inquietudes de justicia social que vive el pueblo argentino. Desgraciadamente, no todos nuestros embajadores están a tono con el momento que estamos viviendo. De nada sirve que su excelencia el señor presidente de la Nación se levante a las siete de la mañana, si nuestros embajadores, en su mayoría, creen que el representarnos en el exterior significa una ganga, una jubilación, y hemos visto, desgraciadamente, que no viven la inquietud que estamos todos viviendo aquí. Si no tenemos cuidado cuando se elijan hombres para esas representaciones, que hagan conocer nuestros aciertos, y aun nuestros errores a los pueblos hermanos, que tengan contacto con el pueblo, y no sólo con cuatro o cinco familias, me parece que nosotros tendremos muchas embajadas para protocolos, fiestas y bailes, pero nada más. Esa es la cruda realidad actual. Desearía que, junto con esta ley, nuestros embajadores nos interpreten, y que en las embajadas haya códigos de trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión —en algunas no he visto ninguno—; que nos conozcan, y nos hagan conocer para que nos juzguen con justicia. De lo contrario, haremos leyes que no tendrán aplicación práctica, si los encargados de aplicarlas no viven las ansias de justicia, que a todos nosotros nos preocupan.

Desearía, entonces, que, junto con la ley, tuviéramos cuidado al elegir nuestros representantes para que esta ley realmente tenga resultados prácticos.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración, en particular.

Sr. Gómez del Junco. — Hago indicación, señor presidente, para que artículo que no se observe se dé por aprobado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Habiendo asentimiento, así se procederá.

—Sin observación, se leen y aprueban los artículos 1º al 7º inclusive.

—Se lee el artículo 8º.

Sr. Tascheret. — Pido la palabra.

Desearía proponer en este artículo un agregado en la parte que se refiere a estas comisiones o delegaciones que designa el Poder Ejecutivo especialmente. Me referiré a un caso concreto en que se designa una misión aeronáutica o de carácter comercial; en estos dos casos, yo entiendo que cuando esas misiones llegan al país donde deben desempeñarse, deben ponerse bajo las órdenes directas del jefe de la misión diplomática, embajador o ministro; aunque eso en la ley no se especifica, muchas veces suele provocar conflictos, porque esas comisiones se consideran desligadas de la autoridad del jefe de la misión diplomática. Hago esta sugerencia a los señores miembros de la comisión.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

El hecho a que se refiere el señor senador por San Juan está previsto en el artículo siguiente, donde se dice que a propuesta de los ministerios se designarán agregados aeronáuticos que dependerán del jefe de la misión. Y el señor senador hace referencia a un agregado aeronáutico.

Sr. Tascheret. — Yo me referiría a la conveniencia de que esas delegaciones o misiones sean de carácter comercial, de orden especial o de cualquier otra índole, estuvieran, al llegar a destino, bajo las órdenes directas del jefe de la misión diplomática permanente, pues, de lo contrario, ocurriría que el jefe de la misión diplomática permanente ignore los trabajos que se realizan, y no pueda ejercer ninguna clase de influencia directa sobre los trabajos que se le han encomendado a la delegación.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Quería explicar que lo que se reglamenta es un servicio especial, el servicio exterior que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, mientras que en el caso a que se refiere el señor senador por San Juan, el funcionario representa quizás a una entidad autárquica, y en ese caso ni el funcionario ni la repartición forman parte del servicio exterior. Entonces, me parece que hay una incompatibilidad evidente en poner al servicio de la misión en el exterior a un funcionario que tiene una característica bien determinada, y que no hace en absoluto a la función de un servidor en el exterior. Sirve una misión, pero de carácter comercial simplemente, circumscripita a las atribuciones que se le hayan dado, pero no puede ser reconocido ese funcionario por el país donde está trabajando, ni puede tampoco depender de la misión que realiza el embajador.

Sr. Bavio. — Pido la palabra.

Me hago cargo del argumento del señor senador por San Juan, que creo se refiere sobre todo a misiones especiales, a representaciones científicas de distinto carácter que están al margen de la función específica de las embajadas.

Pero lo que desea el señor senador es que esas misiones extraordinarias a congresos o a conferencias científicas en el exterior, dependan de la embajada de nuestro país. Pero hay, a mi juicio, señor presidente, un inconveniente. Generalmente, esas misiones que van a congresos científicos, económicos o artísticos, tienen una representación especial, una capacitación especial, no están dentro de la técnica general del derecho internacional y de las cuestiones que tratan o atienden las embajadas, y tal vez, algunos hombres de ciencia, por ejemplo, que el país enviara en determinado momento a un congreso científico en el exterior, bien pudiera ser que no aceptaran una misión si van a ir a depender de la embajada de nuestro país.

Yo creo que sería inconveniente, entonces, aceptar la reforma que propone el señor senador, por más que me doy cuenta perfecta del argumento y del buen propósito que lo guía al hacer esta indicación. Pero creo que incurriremos en el peligro de dificultar en el futuro la formación de nuestras delegaciones a los congresos internacionales o a las conferencias de orden artístico o científico. Es necesario recordar que la ley que estamos tratando se refiere al personal permanente.

Sr. Gómez del Junco. — El artículo dice, señor presidente, que esas comisiones a que se refiere el señor senador por San Juan quedarían asimiladas al cargo protocolar que les corresponda. Podríamos agregar: «al cargo protocolar y jerarquía que les corresponda».

Sr. Bavio. — No, señor senador.

Sr. Gómez del Junco. — En esa forma se podría conciliar.

Sr. Tascheret. — Inclusive, todas las misiones que fueran al exterior.

Sr. Gómez del Junco. — Aquí se habla de jerarquía. Esas misiones quedan asimiladas a su cargo protocolar.

Sr. Bavio. — No. A los efectos del rango protocolar.

Sr. Gómez del Junco. — Entonces, pongamos «rango protocolar y jerárquico», y con eso salvamos lo que señala el señor senador. Porque no podemos admitir que una misión, por importante que sea, vaya al exterior y ande como comparsa suelta, sin ponerse en contacto con el que dirige las relaciones exteriores en el país donde va a actuar, pues la misión no conoce el terreno que pisa ni el ambiente en que vive.

Sr. Bavio. — Pero, señor senador, cuando se envía una misión al extranjero, recibe instrucciones terminantes del gobierno.

Sr. Gómez del Junco. — Una cosa, señor senador, es recibir instrucciones lejos del terreno, y otra, actuar sobre el propio terreno, en un ambiente completamente extraño. El señor presidente, que ha estado en Chile, habrá comprobado que una cosa es recibir instrucciones en el país y otra estar en un ambiente extraño. Hay que darle jerarquía y que sepa qué jerarquía lleva. Puede tener una misión jerárquica superior al embajador, una misión extraordinaria.

Sr. Bavio. — Pido la palabra, para formular una indicación que casi podría llamarse de orden, en la discusión. Se me ocurre, señor presidente, que sería oportuno invitar al señor ministro de Relaciones Exteriores al seno de este recinto, haciéndole saber que estamos tratando esta ley, porque podría suministrarnos algunas informaciones y aclarar algunos puntos en discusión.

Sr. Presidente. — Si hay asentimiento del Senado, así se procederá.

—Asentimiento.

Sr. Gómez del Junco. — Se podría dejar en suspenso la consideración de este artículo y seguir con el resto.

Sr. Bavio. — Podríamos pasar a un breve cuarto intermedio, a la espera del señor ministro.

Sr. Gómez del Junco. — Mientras llega el señor ministro, podríamos seguir tratando los artículos que no tienen observación, y los que fueren objetados los trataríamos en presencia del señor ministro.

Sr. Tascheret. — Me parece oportuna la indicación del señor senador por Salta en el sentido de que se invite al señor ministro, a fin de que nos pueda informar sobre varios artículos de esta ley. Si los vamos tratando, no tendremos oportunidad de escuchar al señor ministro.

Sr. Antille. — Pero hay algunos artículos que podrían tratarse sin discusión.

Sr. de Lázaro. — Podríamos considerar esos artículos mientras llega el señor ministro.

Sr. Antille. — Pido la palabra, para decir algunas con referencia a la cuestión planteada.

Yo deseo que el señor senador preopinante se dé cuenta de que estamos reglando el servicio en el exterior de funcionarios que han sido designados por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo o sin él, del Senado; que esta reglamentación es para funcionarios que son designados con intervención del ministro de Relaciones Exteriores, con categoría, escalafón y sueldo.

Sr. Bavio. — Con carácter permanente.

Sr. Antille. — Es el servicio permanente, quería decirlo ya, mientras que lo que se quiere incorporar aquí es una cosa accidental que poco o nada tiene que hacer con lo que estamos

debatiendo. No interesa que algún señor representante de algún centro científico de cultura argentino vaya a dar conferencias...

Sr. Tascheret. — Yo me refería a las misiones que envía el Poder Ejecutivo.

Sr. Antille. — ¿Qué misión podría enviar si no la incorporara e integrara con un embajador o ministro plenipotenciario? Debe tener esa función y ninguna otra. El Poder Ejecutivo no ha de designar a un particular que no esté investido de estado diplomático, y si ha de estarlo, ya está comprendido en la ley, y está sometido al jefe de la misión. Lo dice clara, categóricamente, el artículo 8º, y lo repite, cuando trata de los agregados aeronáuticos, económicos, el artículo 9º. De manera que el pensamiento del señor senador está salvado.

Sr. Gómez del Junco. — Es así, señor senador, y creo que esta aclaración a que ha dado lugar la cuestión planteada por el señor senador por San Juan, va a ser útil para cuando se reglamente la ley, y no se envíen esas misiones sin control en el exterior. Me doy por satisfecho.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 8º.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba sin observación el artículo 9º.

—Se lee el artículo 10.

Sr. Bavio. — Pido la palabra, para referirme al inciso e) de este artículo.

En él se hace referencia a las condiciones que deben reunir los ciudadanos que pertenezcan al cuerpo diplomático y consular, y se dice que el cónyuge del funcionario será argentino nativo o por opción. Creo, señor presidente, que es un exceso de legislación prohibir a nuestros ministros o funcionarios consulares o diplomáticos que contraigan matrimonio en el extranjero.

Es un asunto que ya se ha discutido en otras partes, en otros países, y se ha llegado a reconocer que no es posible prohibir o establecer casi una prohibición indirecta para mantener el cargo, si contrae matrimonio con una mujer extranjera.

Ya el artículo 12 de esta ley dice que ningún funcionario podrá contraer matrimonio sin previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, y al tramitar este pedido de autorización, nuestro gobierno toma conocimiento de que el funcionario va a tomar estado en otro país, se va a casar con una extranjera y, en un momento dado, si lo cree conveniente, lo trasladará a prestar servicios a otro país, que no sea el de la nacionalidad de la esposa.

Pero establecer en la ley, como condición indispensable, que el cónyuge del funcionario sea

argentino nativo o por opción, podría darnos lugar a encontrarnos con este caso: un funcionario que ha vivido muchos años al servicio de la República en cualquier país del mundo, y contrae matrimonio, por ese hecho ¿va a cesar en sus funciones? Creo, señor presidente, que es un exceso de legislación y que debemos lisa y llanamente suprimir este inciso de la ley.

En ese sentido hago indicación para que este artículo sea aprobado tal cual está proyectado por el Poder Ejecutivo, pero con la supresión del inciso e).

Sr. Cruz. — Pido la palabra.

El inciso a) del artículo 10 dice: ser argentino nativo o por opción.

Yo creo que nuestro servicio exterior debe ser desempeñado por argentinos nativos, y en tal sentido, voy a hacer moción de que se supriman las palabras «o por opción».

Sr. Ramella. — Pido la palabra.

El sentido de las palabras «por opción» se refiere al caso de los hijos de padres argentinos, que, según la ley de ciudadanía, son argentinos, y al llegar a los 18 años pueden optar por la nacionalidad de los padres. No se refiere a los que, siendo extranjeros, adoptan la ciudadanía argentina.

Sr. Cruz. — Entonces, retiro mi indicación.

Sr. Presidente. — ¿La comisión acepta la modificación propuesta por el señor senador por Salta?

Sr. Antille. — Pido la palabra.

No he tenido tiempo de consultar a los demás miembros de la comisión sobre este asunto que es, sin duda, muy interesante. En principio, personalmente, estoy en favor del inciso, tal como ha sido proyectado. Puede ser, tal vez, excesiva la reglamentación al exigir que el cónyuge del funcionario sea argentino nativo o por opción, pero me coloco en el caso de que la ley está rigiendo para el futuro; establece un requisito que ha de cumplirse en adelante, respetando las situaciones actuales. Me pongo en el caso de que esta ley prevé la posibilidad, que ha ocurrido alguna vez, que el diplomático argentino contraiga nupcias con una persona nativa del país en que está actuando y que se produzca una situación de ruptura de relaciones y aun un caso bélico entre los dos países. En esta situación, es preferible negarle a ese funcionario el derecho a contraer ese matrimonio, que obligarle a separarse, puesto que la esposa, indudablemente, optaría por su nacionalidad, con lo que quedaría en su país, o en todo caso, no serviría en forma debida los intereses del país que su esposo representa.

Seguramente, ésta ha sido una de las causas que ha tenido presente el Poder Ejecutivo al redactar esta ley.

Además, si se exige que el esposo sea argentino nativo o por opción, ya que representará al país, ¿por qué no ha exigirse que su compañera también lo sea, puesto que le ha de ayudar, como siempre lo hace en las distintas representaciones diplomáticas del país, ya que las formas protocolares así lo establecen en todos los países del mundo? ¿Cómo es posible suponer que esta esposa no ha de estar acompañándolo con sentimiento de argentina en las funciones que ha de realizar y cómo es posible exigirle ese sentimiento que abriga el esposo, si ella no es argentina? No podemos cerrar los ojos a la realidad. La mujer que no es argentina y se ha casado con un diplomático argentino, no tiene el mismo amor patrio y no puede representar al gobierno y al país en la forma en que lo puede hacer una argentina.

Por ello, lamento tener que manifestar que no acepto la reforma de este artículo.

Sr. Bavio. — Pido la palabra.

Deploro, en verdad —y me es muy respetable la opinión del señor senador por Santa Fe—, que no acepte mi proposición, e invito al Honorable Senado a que medite acerca de la importancia de la modificación que he formulado.

Los tiempos actuales son de verdadera convivencia mundial. En la actualidad, tenemos en el servicio diplomático embajadores eminentes, enviados extraordinarios en misiones especiales, que han contraído matrimonio con mujeres uruguayas, chilenas y brasileñas, ¿y ha de ser ése un impedimento para que pertenezcan al servicio diplomático? En mi sentir, en manera alguna. El gobierno tomará sus medidas en los casos delicados o difíciles a que se refiere el señor senador, cuando encuentre relaciones de familia que puedan perturbar la acción de nuestros diplomáticos; puede trasladarlos, llevarlos a otros países o puede hasta llamarlos a la cancillería. Pero establecer un impedimento, me parece excesivo. Por eso, invito al Senado a que medite sobre esta modificación que propongo, antes de decidirse.

Sr. Presidente. — De acuerdo con una moción a la cual el Senado prestó su asentimiento, los artículos observados serán tratados con la presencia del señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto, que ha prometido concurrir de inmediato.

Sr. Gómez del Junco. — Pido la palabra.

Voy a hablar con toda claridad, ya que el señor senador por Salta no ha dicho exactamente lo que debemos dejar librado al criterio de cada hombre.

El amor no tiene banderas ni nacionalidad, y no podemos, señores senadores, impedir que un hombre útil, por el hecho de haberse enamorado de una dama que no sea argentina, tenga que perder su carrera diplomática.

Sr. Antille. — Y los sacerdotes, ¿no pierden su carrera cuando contraen enlace?

Sr. Gómez del Junco. — Pero ellos ya abrazaron la carrera sabiendo que no pueden contraer matrimonio.

Sr. Ramella. — Es un error; siguen siendo sacerdotes, pero no pueden ejercer su ministerio.

Sr. Gómez del Junco. — Además, la carrera eclesiástica la abraza sabiendo cuál es su contenido. Pero no podemos legislar y llegar a la herejía de privar a los diplomáticos que elijan su compañera, porque tenga tal o cual nacionalidad. Así que estoy en un todo de acuerdo con la proposición del señor senador por Salta.

Sr. Antille. — No se le prohíbe que contraiga enlace, siguiendo el impulso de su corazón; lo que se le impide es que sea representante argentino.

Sr. Bavio. — Prohibirle lo primero no sería posible; pero se dice que no puede formar parte del servicio diplomático.

Sr. Gómez del Junco. — Me extraña que el señor senador por Santa Fe, que es tan galante con las damas... (*Risas.*)

Sr. Antille. — No he alcanzado a oír al señor senador.

Sr. Presidente. — Quedará, entonces, pendiente la votación de este artículo hasta que esté presente el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Se continuará considerando los artículos siguientes.

—Se lee y aprueba el artículo 11.

Sr. Antille. — Pido la palabra, para proyectar un cambio en la numeración del articulado.

Después del artículo 11, en el capítulo de las obligaciones, creo que corresponde agregar el artículo 14, que continúa tratando de «las obligaciones», como podrán verlo los señores senadores y el señor secretario. Se ha producido una transposición, por error de copia, sin duda, por lo que hago indicación para que cuando se considere el artículo 14, se lo coloque como artículo 12, después del 11.

—Asentimiento.

—Se lee y aprueba sin observación el artículo 14, que pasa a ser 12.

—Se lee el artículo 12, que pasa a ser 13.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Este artículo tiene tanta importancia como el inciso que fué observado por el señor senador por Salta, por cuanto aquí todavía se avanza un poco más: se prohíbe contraer matrimonio sin autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la ley orgánica militar creo que es así, pero por razones de disciplina.

Sr. Bavio. — Se trata solamente de que tiene que poner el hecho en conocimiento del ministro.

Sr. Antille. — Es que puede hasta prohibirse.

Sr. Ramella. — En ese caso pierde la calidad de diplomático; no es que no pueda casarse.

Sr. Antille. — Si es así lo acepto, porque es en defensa del principio que sostuve anteriormente. De todas maneras, podríamos dejar la discusión de este artículo para más adelante, cuando se encuentre en el recinto el señor ministro de Relaciones Exteriores.

—Asentimiento.

Sr. Basaldúa. — Si fuera suprimido el inciso e) del artículo 10, entonces convendría hacer este agregado: «Si fuera extranjero el conyuge del funcionario, éste no podrá ejercer sus funciones en el país de la nacionalidad de aquél.»

Sr. Antille. — Por eso hice indicación de que dejáramos la discusión para más adelante.

—Se lee el artículo 13, que pasa a ser 14, y se aprueba.

—Se lee el artículo 15

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Convendría hacer una aclaración con respecto al inciso d) del artículo 15. Este agregado consistiría en agregar, tras la palabra «firmas», la palabra «comerciales». Hago moción en ese sentido.

Sr. Figueiras. — Propongo que el artículo quede tal cual está, porque pueden representar firmas que no sean extranjeras.

Sr. Antille. — Yo he pedido que se agregue la palabra «comerciales».

Sr. Figueiras. — Muy bien.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 15, con el agregado propuesto por el señor senador por Santa Fe.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 16.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Seguramente, en el inciso h) se hace referencia a que el haber de retiro es un derecho del diplomático. Parece un poco obscura esta redacción, porque faltaría la palabra «percibir», antes de «el haber de retiro». Con esto quedaría bien claro el pensamiento. El agregado completo sería el siguiente: «Percibir el haber de retiro, y dejar pensión para los deudos.»

Sr. Presidente. — Se va a dar lectura al inciso h), con la modificación propuesta.

—Se lee:

h) Percibir el haber de retiro y dejar pensión para los deudos, según lo determine la correspondiente ley.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo, con la modificación propuesta por el señor senador por Santa Fe al inciso h), es decir, agregar la palabra «percibir» antes de «el haber», y la palabra «dejar» antes de «pensión».

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 17, y se aprueba sin observación.

—Se lee el artículo 18.

Sr. Teisaire. — Pido la palabra.

Relacionando este artículo con el siguiente, no podría formar parte de la junta calificadora, un cónsul general, porque tiene que calificar a ministros de segunda clase. En el artículo que sigue, se puede ver cómo es la calificación.

Sr. Antille. — En el inciso b), señor senador, se exceptúa de la calificación a los embajadores y ministros de primera clase.

Sr. Teisaire. — Pero no a los de segunda, y un ministro de segunda clase es superior al cónsul general.

Sr. Antille. — Así es. ¿Haría el señor senador alguna indicación al respecto?

Sr. Teisaire. — Sí, señor senador; que se incluya en el artículo 19, inciso b) las palabras «y segunda clase», al final de dicho inciso.

Sr. Antille. — Sería conveniente que se exceptuara también a los ministros de segunda clase.

Sr. Tascheret. — Probablemente, el sentido del artículo es el siguiente: que la presencia de un cónsul general en la comisión calificadora, responde a la necesidad de que los funcionarios consulares sean calificados por un miembro de la carrera consular.

Sr. Teisaire. — De acuerdo, pero es un funcionario de menor jerarquía.

Sr. Presidente. — ¿Formula el señor senador por la Capital, alguna moción concreta con respecto al artículo 18?

Sr. Teisaire. — No, señor presidente; la formularé cuando se trate el artículo 19.

Sr. Presidente. — Queda, entonces, aprobado el artículo 18.

—Se lee el artículo 19.

Sr. Teisaire. — Pido la palabra.

Aquí vendría, señor presidente, la modificación a que me he referido, que consistiría en agregar a los exceptuados, los ministros de segunda clase.

Sr. Antille. — La comisión acepta el agregado.

Sr. Presidente. — Se va a votar la modificación propuesta, consistente en agregar en el inciso b), a continuación de las palabras «y ministros de primera» lo siguiente: «y segunda».

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Teisaire. — Con respecto al inciso c) de este mismo artículo, creo que en él también habría que establecer la excepción, porque va a resultar que ministros de primera y segunda clase y cónsules asesoren sobre ascensos de funcionarios de mayor jerarquía que ellos.

Hay que establecer en el inciso b) la aclaración, quedando exceptuados los embajadores y ministros de primera y segunda clase.

Sr. Antille. — En ese caso no habría un asesoramiento.

Sr. Teisaire. — El asesor es el ministro.

Sr. Antille. — La comisión calificadora la constituyen un embajador y un ministro, pero hay mayoría respecto a los primeros cargos.

Sr. Teisaire. — Eso no solucionaría el problema.

Sr. Antille. — Es preferible siempre mantener el asesoramiento.

Sr. Teisaire. — Sí, señor senador; pero con la jerarquía que corresponda.

No es posible que el cónsul general, que no tiene la debida jerarquía, se entere de cuestiones que corresponden a un embajador.

Sr. Antille. — El señor senador por la Capital propondría que cuando se trate de embajadores y ministros de primera y segunda clase no intervendrá el cónsul general.

Sr. Teisaire. — De acuerdo.

Sr. Antille. — La comisión acepta el agregado al inciso c) propuesto por el señor senador por la Capital, en el sentido de que cuando se trate de embajadores y ministros de primera y segunda clase, no intervendrá el cónsul general.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo con la modificación propuesta por el señor senador por la Capital y aceptada por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban, sin observación, los artículos 20 a 29.

—Se lee el artículo 30.

Sr. Tascheret. — Desearía que el señor miembro informante me aclare si estas remociones no podrán hacerse, sino con acuerdo del Senado.

Sr. Antille. — Así, efectivamente, dice la ley. Tanto el nombramiento como la remoción tie-

nen que ser hechos con acuerdo del Senado. Tal vez no esté muy bien redactado el artículo, pero ése es el sentido. ¿Cuál es la duda, señor senador?

Sr. Tascheret. — Si realmente puede hacerse la remoción sin previo acuerdo del Senado.

Sr. Antille. — No; la remoción tiene que hacerse previo acuerdo del Senado.

Sr. Tascheret. — Muy bien.

Sr. Presidente. — Si no se hace observación, se dará por aprobado.

—Se leen y aprueban, sin observación, los artículos 31, 32 y 33.

—Se lee el artículo 34.

Sr. Teisaire. — Pido la palabra.

En este artículo se dice que la persona que lo reemplace interinamente quedará confirmada en el mismo. Es algo que se produce automáticamente, pero puede hallarse reemplazando a un embajador, un consejero, un hombre de categoría inferior, y va a resultar entonces que un ministro de segunda, por ejemplo, va a reemplazarlo.

—Entra al recinto y ocupa su banca el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto, doctor Juan Atilio Bramuglia.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Para información del señor ministro voy a decir que estamos tratando el artículo 34 y se ha hecho observación a él, porque se entiende que no se puede reemplazar definitivamente al funcionario de categoría superior, cuando la función la ejerza un funcionario de grado inferior.

Sr. Teisaire. — El caso es el siguiente: una embajada donde no se ha presentado el embajador o ha pasado a disponibilidad. Queda a cargo de ella el funcionario que le sigue, que puede ser un ministro de segunda, y, de acuerdo con los términos del artículo 34, finalizada esa disponibilidad, pasaría ese señor a tomar posesión del cargo de embajador, automáticamente.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. — No, señor senador.

Sr. Antille. — El artículo 34 dice que quedará confirmado en el mismo, debiendo requerirse el acuerdo cuando fuere preciso. Puede darse el caso de un funcionario interino cuyo grado no sea suficiente.

Sr. Teisaire. — No solamente el grado, sino la antigüedad y las condiciones personales del individuo.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.
— El sentido del artículo alude al funcionario

que continúa en grado, diríamos, al reemplazado, pero no se refiere de ningún modo a un funcionario que tenga una jerarquía inferior. Puede ocurrir que la embajada quede a cargo de un consejero y, en ese caso, no sería posible llevarlo inmediatamente al grado de embajador.

Sr. Antille. — Yo aceptaría la observación y quedaría totalmente aclarado el artículo si se agregaba después: «la persona quedará confirmada en el mismo, siempre que tuviera los requisitos indispensables».

Sr. Teisaire. — Exactamente, porque para eso hay una junta calificadora.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. — Sin oponerme desde luego al agregado al artículo, quiero señalar que en la forma que se encuentra, nunca se restará eficiencia o eficacia al servicio. Deseo agregar, además, que esta ley ha de ser reglamentada, y en las disposiciones respectivas pueden enunciarse los casos en donde el funcionario que reemplaza quedará confirmado, si es que tiene la categoría y antigüedad correspondientes. Pero, desde luego, quiero dejar aclarado que no me opongo a ninguna modificación que esclarezca la ley.

Sr. Presidente. — ¿Cuál era el agregado del señor senador?

Sr. Antille. — El señor senador por la Capital propone, y la comisión acepta, que se agregue, después de las palabras «quedará confirmado en el mismo», las siguientes: «siempre que llenare los requisitos de la ley, debiendo requerirse el acuerdo, cuando fuere preciso».

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 34, con el agregado propuesto por el señor senador por la Capital y aceptado por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Estando presente el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto, podríamos considerar el artículo 10.

Sr. Bavio. — Pido la palabra.

Encontrándose en su banca el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto, nos podría ilustrar acerca del alcance del inciso e) del artículo 10, que dice que para pertenecer al cuerpo diplomático y consular es indispensable que el cónyuge del funcionario sea argentino nativo o por opción.

Considero que es tal vez un exceso de legislación que en los momentos actuales constituya un impedimento para formar parte del servicio diplomático y consular de la Nación el hecho de contraer matrimonio con una mujer extranjera.

Si tenemos en cuenta que el artículo 12 de la ley en discusión establece que ningún funcionario podrá contraer matrimonio sin previa autorización del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, es evidente que el ministro tiene en sus manos el contralor de la situación perso-

nal de los funcionarios del servicio diplomático, a fin de trasladarlos a otro país al que no pertenezca su cónyuge, o tomar cualquier otra medida necesaria, en resguardo de los altos y permanentes intereses del país.

En estos momentos, en que es tan común que los embajadores, ministros y cónsules, contraigan matrimonio en países extranjeros, especialmente americanos, con mujeres extranjeras, me parece un exceso establecer entre los impedimentos esta condición a que se refiere el inciso e).

Sería interesante conocer la opinión del señor ministro sobre el particular.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. — Pido la palabra.

El inciso e) del artículo 10 ha sido colocado por el Poder Ejecutivo para prevenir ciertas dificultades que se observan en el ejercicio del servicio diplomático del país. Por lo pronto, uno de los graves inconvenientes con que tropezábamos era el hecho de que muchas representaciones —no me refiero a las de primera categoría, sino a las inferiores— estaban ejercidas por extranjeros, muchos de ellos sin carta de ciudadanía. Puede imaginarse el Honorable Senado lo que tal hecho importaba. Significaba que la representación argentina, por lo general, estaba mal ejercida. Eso ocurría, naturalmente, por razones obvias que no considero del caso mencionar.

Quizás parezca un exceso de sentido argentino el que nosotros extendamos, para el ejercicio de la representación diplomática, esa ineptitud legal a las esposas de los hombres que representan a nuestro país en el exterior.

Confieso que en un principio no era íntimamente muy partidario de la inclusión de esa disposición. Pero nos hemos encontrado con que, eliminados del servicio diplomático todos los extranjeros que lo ejercían, la mayor parte de los funcionarios del servicio exterior habían contraído enlace con mujeres extranjeras. Tal vez, parezca a simple vista que eso no tiene ninguna importancia. En cambio, la tiene y es lógico que la tenga. Yo no necesito decir aquí hasta qué grado puede llegar la influencia de una esposa sobre su cónyuge, con la mejor intención y con el mejor propósito, incluso el de estimular al esposo. Por eso me ha parecido oportuno colocar esta disposición, porque no impide el ejercicio de la diplomacia a un hombre argentino que se case con una extranjera, ya que le permite a la señora, por naturalización, obtener la ciudadanía argentina.

Quizá ese exceso de legislación a que se refirió el señor senador pudiera existir si es que los ministros que se van sucediendo en Relaciones Exteriores tuvieran en cuenta esta opinión de la comisión, que en cierto modo da el espíritu de la ley, o lo da plenamente, más que

en cierto modo. Pero es que puede no ocurrir eso, y para evitar que la representación esté ejercida por argentinos nativos que hayan contraído enlace con mujeres extranjeras que no se hubieran decidido por la ciudadanía argentina, es que hemos colocado esa disposición. Eso no inhibe a ningún representante argentino para casarse con una extranjera; absolutamente, porque la esposa puede obtener la ciudadanía argentina. Se me ocurre que esto puede salvarse oportunamente, cuando se trate la cuestión de ciudadanía argentina de las mujeres.

Sr. Bavio. — Si me permite el señor ministro, no escapará a su criterio que es ya una violencia que la esposa tenga que declarar que opta por la ciudadanía del esposo, renunciando a la propia.

Claro que no es un sacrificio grande, pero ya es una situación nueva que se le crea a la esposa.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. — Comparto esa violencia, pero sobre ella, señor senador, existe el interés superior del Estado. Confieso que no sin preocupaciones espirituales y mentales he colocado esa disposición, porque no había sido partidario de ella en el fondo de mi espíritu; pero es que hay intereses superiores que predisponen a la colocación de ese inciso, y son los superiores de la Nación. Lo he percibido a través de una cantidad de representantes que están en esa situación, en cierto modo influidos, internacionalizados —diría así— porque necesitan estarlo para convivir armónicamente. No es posible sentir ese espíritu argentino con la misma intensidad, en esas condiciones, que como lo siente un hombre con su mujer totalmente ligada al país en todos sus aspectos, por haberse desprendido de su ciudadanía originaria.

Me explico las preocupaciones del señor senador por Salta, que han sido las mías. Pero pido al Honorable Senado que mantenga esa disposición, porque con ello se va a hacer un servicio a la diplomacia argentina.

Sr. Figueiras. — ¿Esto no tendrá efecto retroactivo?

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. — Desde luego que no; es para el futuro. Y en todos los casos, la esposa del funcionario en esas condiciones puede solicitar la naturalización.

Sr. Bavio. — Entonces, no hay ningún inconveniente; puede optar.

Sr. Gómez del Junco. — ¿Y esto no se podría solucionar estableciendo, en su oportunidad, que todos los aspirantes a tales cargos del servicio exterior, deben ser casados antes de ir a ocupar el cargo? En esa forma, ningún argentino saldría del país sin contraer matrimonio.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. — No sería posible, señor senador...

Sr. Ramella. — Pido la palabra, para dejar sentado el concepto «o por opción», que se utiliza en el artículo 10, incisos a) y e).

Entiendo que las palabras «o por opción» que figuran en este articulado es el que corresponde a la ley de ciudadanía, que establece que los hijos de argentinos nacidos en el extranjero, al llegar a los 18 años de edad, pueden optar por la ciudadanía de sus padres.

No es el caso, me parece, de la mujer que opta por la ciudadanía del marido, lo que no autoriza la ley de ciudadanía. En ese caso, tendría que sacar carta de ciudadanía. Y más, el artículo se refiere, con muy buen acuerdo, «al cónyuge», porque puede suponerse el caso de que el funcionario sea mujer, y en ese caso es evidente que los términos «o por opción», se refieren a la ley de ciudadanía, que contempla el único caso en que se puede optar por la ciudadanía argentina. Lo otro sería carta de ciudadanía.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. — Admito, señor presidente, la observación del señor senador, porque es jurídica. En realidad, jurídicamente, la opción se refiere a los hijos de argentinos, nacidos en el extranjero. Pero en el lenguaje común la opción determina la posición del extranjero ante la carta de ciudadanía. Podría reemplazarse el concepto «por opción», y colocar el de naturalización.

Sr. Ramella. — Si se adopta ese sentido en el inciso e), por opción, querría decir que según el inciso a) también una persona naturalizada podría ser diplomático argentino, lo que no es concebible.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. — Así es.

Sr. Ramella. — Más vale emplear un término distinto para un concepto también distinto.

Sr. Antille. — Podría ponerse «por naturalización».

Sr. Bavio. — ¿Cómo quedaría el inciso?

Sr. Secretario (Reales). — Inciso e): «que el cónyuge del funcionario sea argentino nativo o por naturalización».

Sr. Presidente. — Se va a votar en la forma en que se ha leído.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Está en consideración el artículo 12, que pasa a ser 13, que se leerá.

Sr. Secretario (Reales). — «Ningún funcionario podrá contraer matrimonio sin previa autorización del ministro de Relaciones Exteriores.»

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. — Pido la palabra.

Esta disposición no hace más que articular en la ley lo que ya es una costumbre en la cancillería. Ningún funcionario puede contraer enlace siendo funcionario de ella, sin pedir au-

torización al ministro. Desde luego, como digo, no hemos hecho más que consagrar una vieja costumbre del ministerio. Sirve esta disposición para determinar si hay posibilidad de aceptar esa situación, porque puede haber casos en que no convenga, y puede además necesitar la cancillería decirle al funcionario que debe trasladarse a otro lugar por tales y cuales razones. Yo no quisiera entrar al análisis de los casos expresos que podrían provocar la necesidad de la autorización. Insisto en que es una costumbre en todas las cancillerías del mundo.

Sr. Antille. — Antes de llegar el señor ministro al recinto, a través de las observaciones hechas, se ha suscitado la duda de si podía esta autorización que aquí exige cristalizarse en una posible negativa al derecho de un funcionario de contraer matrimonio. Autorizar quiere decir reservarse el derecho de negar la autorización, lo que significaría impedir el matrimonio.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. — Así es.

Sr. Antille. — A mí no me ha parecido que fuera muy grave, puesto que la consecuencia sería, en último extremo, que abandonara la carrera diplomática el funcionario que contrajera matrimonio sin esa autorización.

Esa es la única consecuencia.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. — No se ha dado ningún caso en que la autorización se negara, porque está sobrentendido que la cancillería debe darla, porque, de lo contrario, sería coartar el ejercicio de un derecho civil. Pero, en realidad, puede haber algunos casos en que la cancillería no se vea obligada a negarle que contraiga matrimonio, pero, en cambio, si decirle al funcionario que si contrae matrimonio deberá trasladarse a otro país, por superiores razones de Estado. Podría, en todo caso, limitarse eso de alguna manera por la reglamentación o dando ya en esta discusión el sentido que el artículo tiene. Es decir, que no puede en ningún caso negarse el permiso, si se está dentro de las condiciones de la ley y siempre que cumpla los traslados previos que se ordenaren.

Sr. Bavio. — El propósito de la disposición es mantener una información sobre el estado civil y la situación de los diplomáticos.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. — Puede haber casos especiales, según el país de que se trate.

Sr. Antille. — Hago indicación de que se vote el artículo tal como está redactado.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 35.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

— Pido la palabra.

Esta disposición tiene su razón de ser. Cuando el funcionario se encuentra en el extranjero y ha cumplido los años de servicio y tiene la edad para el retiro, generalmente la cancelería lo hace regresar, o lo coloca directamente en disponibilidad. En esas condiciones, el funcionario no goza de ningún emolumento del Estado. No se le abona su sueldo, y además, incluso me encontré en algunos casos con la curiosa circunstancia de que ni siquiera se le pagaba el embalaje de sus cosas, ni el transporte. De manera que si el funcionario se encuentra en Europa y se le envía a disponibilidad, si no tiene recursos propios ni los medios suficientes para venir al país de vuelta, el Estado no se los proporciona. En consecuencia, me parece que la mejor manera de suplir esa deficiencia, que se produce con hombres que cumplen su cometido en el extranjero, como parte de su carrera y de su trabajo, es establecer un mes de viático y el pago de esos gastos de transporte y embalaje.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se votan y aprueban, sin observación, los artículos 36 a 60, inclusive.

—Ocupa la Presidencia el presidente para caso de acefalía, senador por la Capital, contraalmirante Teisaire.

—Se lee el artículo 61.

Sr. Ramella. — Pido la palabra.

Con respecto al inciso d), para concordarlo con la disposición del artículo 86, inciso 10 de la Constitución, y con el mismo articulado de la ley, en el número 30, propondría la siguiente modificación: «suspensión por más de 30 días, por el Poder Ejecutivo»; y como otro inciso, «e) cesantía o exoneración, por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado». Porque en este caso, expresamente la Constitución dice que la remoción del cuerpo diplomático tiene que hacerse con acuerdo del Senado.

Sr. Tascheret. — Anteriormente se aclaró.

Sr. Ramella. — En el artículo 30.

Sr. Figueiras. — Pido la palabra.

El afectado por una medida disciplinaria no tiene derecho a ninguna apelación, de acuerdo con esto. Yo creo que debería haber un inciso que contemplara esta situación, porque bien pudiera ser que el castigo fuera injusto y aquí no dice nada.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

— Debo advertir al señor senador que éste es una norma positiva. A lo que se refiere el señor senador, sería una norma de procedimiento, que

corresponderá fijarla en la reglamentación respectiva. Aquí lo único que hace la ley es fijar causas y penas, no el procedimiento. De modo que el procedimiento estará regulado por la reglamentación respectiva, que oportunamente se dicte, cuando se apruebe la ley por el Congreso de la Nación.

Sr. Presidente (Teisaire). — ¿Acepta el señor senador?

Sr. Figueiras. — Yo me doy por satisfecho siempre que en alguna parte se establezca el derecho de defensa.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. — El derecho de defensa, señor presidente, lo da, en principio, la Constitución. De manera que eso se aplica en todos los casos. Está absolutamente seguro el señor senador, que en la reglamentación respectiva tendrá que establecerse el procedimiento.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, doctor J. Hortensio Quijano.

Sr. Ramella. — Yo había propuesto una modificación en el artículo 61.

Sr. Presidente. — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta por el señor senador por San Juan?

Sr. Antille. — ¿Medida disciplinaria en conducta grave pública y privada. ¿Es ésa la cuestión, señor senador?

Sr. Ramella. — Hago la cuestión con respecto a la cesantía, que tiene que ser decretada por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, según disposiciones constitucionales expresas.

Sr. Antille. — En el caso de cesantía o exoneración a que se refiere el artículo 59.

Sr. Ramella. — Podrían leerse por Secretaría las modificaciones propuestas.

Sr. Secretario (Reales) (leyendo). — El inciso d) quedaría redactado en la siguiente forma: «Suspensión por más de 30 días, por el Poder Ejecutivo»; «e) cesantía o exoneración, por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado».

Sr. Antille. — El artículo 30 ya ha previsto el caso. Dice que el funcionario, con acuerdo del Senado, no puede ser separado, sino con acuerdo del mismo cuerpo. Está sobreentendido, entonces, que aquí, cuando se aplica la separación, cesantía, o exoneración, tiene que acudir al Senado, pidiendo el acuerdo. Creo que sería innecesario establecerlo.

Sr. Ramella. — Yo no lo creo, señor senador. Cuanto más claro, mejor.

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. — ¿Me permite el señor senador?

Quiero aclarar que estas disposiciones de los artículos 59 y 63 se refieren a las medidas disciplinarias y remoción de todos aquellos funcionarios designados sin acuerdo del Senado.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el despacho.

4

INTEGRACION DE COMISION

Sr. Secretario (Reales). — La Presidencia informa que, de acuerdo con la autorización que se le otorgara en la sesión del 13 de noviembre,

ha designado al señor senador Busquet para integrar la Comisión Especial del Seguro Agrícola.

Sr. Presidente. — No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

—Son las 19 y 50.

CARLOS E. MALLADA.
Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos.